

# **La paz primero que la guerra**

Horacio Serpa-Uribe

## **VIOLENCIA POLITICA Y GUERRA EN COLOMBIA**

*El dramático aumento de la violencia política y terrorista en Colombia ha puesto en tensión los recursos del conjunto social para plantear o imponer alternativas a su escalada autónoma. A finales del 92 la prensa colombiana reprodujo intervenciones sobre la cuestión; aquí incluimos la carta de intelectuales colombianos a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la respuesta de ésta, y dos reflexiones de Plinio Apuleyo Mendoza y Horacio Serpa Uribe\* junto con un ensayo sobre el tema elaborado especialmente por Francisco Leal Buitrago.*

Todavía no se han decantado suficientemente las reacciones que provocó la declaratoria del estado de conmoción interior. Diferentes fueron las posiciones, y contradictorias en muchos casos, aun cuando explícitamente abundaron las adhesiones y las manifestaciones de solidaridad con el Gobierno. Muchos ciudadanos, muchos políticos, representantes de gremios, organizaciones cívicas y sociales, representantes de la prensa y comentaristas diversos de la vida nacional, han dicho que sí a la situación de emergencia y respaldado con su opinión las medidas adoptadas. Incluso de diferentes lados las han pedido más enérgicas, más definitorias, y han sido bastantes los que, al respaldar al Gobierno, le han hecho objeto de agudas recriminaciones por una actitud que consideran perjudicialmente extemporánea.

Pero no ha sido completa la coincidencia en el elogio. Han surgido preocupaciones, y el examen de los decretos extraordinarios provocó observaciones que merecen un cuidadoso examen. No todo ha de ser algazara y celebración cuando se trata de una situación de la que dependen la seguridad de los colombianos, el ejercicio de sus derechos y la vida misma de la Nación.

---

\* Estos dos textos aparecieron en *El Tiempo* («Lecturas Dominicales»), Bogotá, en su edición del 29 de Noviembre de 1992.

Porque, como ahora dicen algunos con tanto regocijo, «estamos en guerra». Y la guerra, que es impredecible, que se sabe cuándo comienza pero nunca cuándo se va a acabar, que exige gastos y sacrificios, que a decir de alguno «comienza con soldados pero termina con cadáveres», es asunto de mucho cuidado. No es un premio para celebrarlo, ni un carnaval para gozarlo, ni una causa distinguida de la que se pueda estar orgulloso. Es una confrontación violenta, a sangre y fuego, generalmente despiadada y radical, en la que el país se empobrece y el pueblo sufre, entre otras cosas porque nadie está a salvo, así no forme parte de las fuerzas en choque.

### ***Conflicto viejo***

Y la verdad es que padecemos los rigores de una aguda y violenta pugna. Entre compatriotas, que es lo peor. No de ahora, a raíz del decreto presidencial sobre conmoción interna, como se anuncia con miopía, sino de hace años, cuando surgió una disidencia al régimen legal que se propuso alcanzar el poder público por medio de las armas. Varias décadas han transcurrido en medio de las balas y de la indiferencia de muchos de quienes ahora hacen la apología de la beligerancia. El M-19 nació luego de las elecciones de 1970; cuando el EPL tomó la importante decisión de vincularse a la actividad política democrática llevaba 25 años de lucha subversiva; el ELN acaba de cumplir 28 años de existencia, y desde antes existían las FARC. No fue simple demagogia electoral que la campaña presidencial de 1982 se adelantara a los gritos de «La paz es liberal» del doctor López, y «La paz es nacional» del doctor Betancur, ni que la aprobación ese año de una ley de amnistía hubiese estado precedida de otra impulsada durante el gobierno anterior y por una Comisión de Paz designada por el presidente Turbay Ayala.

Desde entonces está presente la guerra, que no se libraba con la cruel intensidad de ahora, ni en el corazón mismo de los grandes centros urbanos. Parecía cosa remota y sin trascendencia, y por ello no era importante examinar el fenómeno, ni conocer sus causas, ni reflexionar sobre sus alcances, ni encontrarle solución. Era un pleito lejano, entre guerrilleros y soldados.

Agigantado el conflicto, aumentó también la conciencia gubernamental, política y ciudadana, sobre su verdadero significado. Y el Estado lo ha afrontado con resolución. No hay tal que haya estado cruzado de brazos mirando conforme o impotente su crecimiento. Año por año ha aumentado el porcentaje del presupuesto para seguridad y defensa nacional; cada día son más los fusiles que se usan y los soldados que se incorporan. La angustia de las madres de los bachilleres

por el eventual alistamiento de sus hijos obedece a la dramática realidad de la confrontación. El reporte de las 800 bajas infligidas a la subversión este mismo año, antes de la denominada «declaratoria de guerra», significa que las Fuerzas Armadas no han estado propiamente inactivas. Ocurrió, y no es para arrepentirse, que la modalidad de esta lucha irregular y prolongada, su desastrosa incidencia en la vida del país, su dramática y evidente inutilidad, el haber identificado en el contendiente planteamientos, explicaciones e intenciones políticas y el insistido clamor popular por el entendimiento y la conciliación, llevaron a sucesivos gobiernos, siempre con el mayoritario respaldo de la auténtica opinión pública, que no es necesariamente la que pretenden representar muy afamados comentaristas de prensa y televisión, a buscar en la transacción política la más apropiada e incruenta solución al diferendo armado.

### ***Resolución para la paz***

El presidente Gaviria lo intentó con muchas buenas razones a la mano, conciente de su necesidad y precisado a ello por políticos, gremios, asociaciones, sindicatos, medios de comunicación, articulistas, alcaldes y la propia Asamblea Nacional Constituyente. Sin abandonar los deberes de enfrentar militarmente la subversión, insistiendo en la necesidad de invertir más en seguridad y justicia, que fue una de las tesis gubernamentales bajo las cuales se iniciaron los diálogos de Tlaxcala, sin interferir para nada la acción de la fuerza pública como torticeramente se le reprocha, el Presidente buscó afanosa, patrióticamente, la solución más conveniente. Su patrocinio a la reforma constitucional en busca de una democracia más real que permita la contradicción política sin armas con garantías ciertas para lograr el acceso al poder, fue parte de una conveniente estrategia por la paz. Igualmente, la política del diálogo con objetivos, buscando resultados concretos en materia de entendimiento para cuyo desarrollo y efectividad el Gobierno fue ciertamente amplio, insistente y voluntarioso. Era explicable. La mejor inversión nacional, en recursos, en posibilidades, en ánimo transaccional, aun en riesgos, es la que se realiza para lograr tranquilidad, seguridad y convivencia.

Por eso hoy, como nunca antes, el Gobierno llega al estado de conmoción interior asistido de legitimidad. La situación de emergencia declarada es, aquí y en todas partes, una brecha del constitucionalismo. No puede ser motivo de alegría sino de mortificación. Es, ni más ni menos, un colapso del Estado Social de Derecho que caracteriza a nuestro sistema político y a nuestra democracia. A él no se puede arribar por capricho, ni por vanas presiones, ni en la arrogante actitud del déspota que pretende imponer su sacrosanta y arbitraria voluntad sobre los anhelos del

común, sino lleno de argumentos, excepcionalmente, en la aspiración de brindar al ciudadano el pleno goce del derecho a la paz que entre nosotros es un notable atributo constitucional motivado por el afán patriótico de volver pronto a la normalidad. Que es lo notable de la situación de hoy y lo que hay que reconocer conscientemente al presidente Gaviria, en lugar de cuestionar dizque la demora y de reclamar «tierra arrasada» contra todo lo que signifique reproche, disentimiento, crítica u oposición.

### ***Sin razón guerrillera***

Son fundadas las censuras a la guerrilla. Todos los días es más difícil reconocerle una dimensión política o un objetivo social. Busca el diálogo, pero no lo justifica, porque no aporta para crear el clima que lo permita y le dé estabilidad, ni lo aprovecha para buscar resultados de conciliación. No presenta al país sus demandas, sus aspiraciones, ni le dice a los colombianos en qué funda su accionar subversivo. Pretende discutir exclusivamente lo coyuntural, dejando de lado marrulleramente el análisis de la cuestión política, que durante años fue su objetivo más apreciado. Se abstiene de considerar el contenido de la nueva Constitución, y ninguna inquietud muestra por las nuevas perspectivas y realidades en materia de democracia. Abandonó el interés por la defensa de los derechos humanos y la humanización de la guerra, porque las acciones que ejecuta hacen que esos contundentes argumentos de otras épocas se vuelvan frágiles en sus manos. Ha acrecentado las llamadas ejecuciones sumarias, que ciertamente son injustificados crímenes ocasionados por hábiles sicarios. Sectores de sus fuerzas revolucionarias, que ya no lo son tanto, se han bandolerizado y depredan con igual énfasis que el delincuente común. Matan soldados, policías y detectives sin armas o en estado de indefensión. Obstaculizan el accionar político democrático, y constriñen material y moralmente a los funcionarios. Secuestran y extorsionan sin consideración ninguna con las víctimas, que en ocasiones son niños y ancianos, y aun aquellas acciones que realizan con el pretexto de «enjuiciar» políticamente a quienes sindicán de delitos o malos manejos, son utilizadas para llenar sus bolsas insaciablemente ávidas de dinero contante y sonante, nacional o extranjero. Atentan contra los bienes de producción, ahuyentan al inversionista, afectan la riqueza nacional, causan irreparables daños ecológicos y, en demostración flagrante de su intransigencia e irracionalidad, destruyen los bienes de uso público que de alguna manera favorecen al pueblo que pretenden defender.

### ***Crisis general***

Ello es verdad, pero no es toda la verdad.

Quien calla el resto le hace daño al país, al pueblo, a su futuro, que sólo será despejado y promisorio si se examina el presente en su cruda realidad. Hay paramilitares en Colombia, que igualmente devastan y matan, que eliminan a líderes populares e intimidan y someten a comunidades enteras. Los hay en el Magdalena Medio y en los Llanos y han vuelto a aparecer y a cobrar fuerza en Urabá, Córdoba y Risaralda. Los hay en la zona de El Carmen de Chucurí, cuya historia no se cuenta completa ni de un lado, ni del otro. Y hay quienes desde la «legalidad» amparan tan criminales proceder. Y a pesar de que ciertamente se ha prestado atención a la violación de los derechos humanos, de alguna manera continúan desconociéndose e irrespetándose.

La corrupción existe en muchas instancias de la vida nacional, pero prevalece en el sector público. En todas sus formas y modalidades. Se esquilmal al ciudadano, se le presiona, se le boletea, desde muchos escritorios oficiales. Y buscando seguridad, se le detiene arbitrariamente, se le intimida, se le tortura. De la ejecución de desapariciones forzadas han sido señalados como responsables miembros de la Policía. Con frecuencia integrantes de la Fuerza Pública aparecen comprometidos en extorsiones, secuestros e ilícitos contra la propiedad. Oficiales del Ejército han sido sancionados por patrocinar, estimular o encubrir actos ilícitos del paramilitarismo. Se ha ejecutado prisioneros o ciudadanos inocentes. Ser bribón no es propio solamente de facinerosos o guerrilleros.

También existen en la actividad política, acusada con insistencia de corrupción. Los partidos se atomizaron y marchan erráticos y sin rumbo. La componenda y el individualismo es lo que los ciudadanos ven en el accionar político, y por eso a quienes ejercemos la actividad se nos moteja de pillos y cuando menos de avivatos. Hay desconfianza, muchas veces explicable, a las colectividades partidistas, y un beligerante y cada vez más extendido rechazo a sus pretensiones y procedimientos.

El comportamiento general de los ciudadanos no se escapa a la crisis. No participa, se aísla inconveniente e interesadamente. Su círculo de preocupaciones es sólo el de sus afectos personales. No manifiesta de ninguna manera solidaridad con la sociedad, ni con el Estado, y practica frecuentemente el principio facilista y cobardón que llamó del «nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto».

Y hay pobreza. Mucha pobreza. Más de 10 millones de compatriotas en la miseria absoluta. El índice de desempleo es superior al 10 por ciento, y el subempleo es abundante. La educación no es suficiente, y ahora, por razón del debate congresional, nos hemos enterado de que la seguridad social solamente cubre al 18

por ciento de las personas que trabajan. El campesino está en virtual abandono, y los servicios públicos fundamentales no se brindan a un alto porcentaje de la población. Y lo que es peor, los pregoneros de la guerra, aprovechando inescrupulosamente la respetable argumentación de que no debe justificarse la subversión en la pobreza sino propugnar porque aquella desaparezca para que pueda superarse ésta, se desentienden olímpicamente del problema y apoyan sin consideración políticas económicas a las que poco o nada interesan el aspecto social.

### ***En litros de sangre***

La situación es, entonces, compleja. No es solamente la subversión. No es únicamente acabar con la guerrilla, así ello entrañe terminar también con lo que tenemos de democracia y de civilización. El asunto es mucho más complicado que pedir poner en marcha los tanques, exigirle a las autoridades que muestren al público los cadáveres cobrados cada día en las filas de los insurrectos y autorizarlas para que fusilen en las plazas a los delincuentes. No puede ser que el resultado de la lucha institucional por alcanzar estabilidad democrática y seguridad comunitaria sea, como en un partido de fútbol, lograr que el número de muertos de la guerrilla sea mayor que los muertos del Ejército Nacional. Como apropiadamente lo expresó el Ministro de Defensa en el Congreso, el éxito de la lucha por la convivencia «no se puede medir en litros de sangre».

No hay duda de que la situación actual impuso el recrudescimiento de la confrontación militar. La actitud subversiva destruyó la posibilidad del entendimiento civilista y por ello el Gobierno abandonó el procedimiento de la negociación, que aquí y en cualquier parte, frente a la crudeza de la guerra, es el más conveniente para acabarla. Pero requiere condiciones.

Exige disposición y voluntad, que hoy no existe en la guerrilla, ni han existido en algunos sectores de la denominada sociedad civil. Por eso cada día se hace más evidente que el logro de la paz mediante acuerdos es, sobre todo, un acto de valor. Sigue estando presente la certera manifestación de que es más fácil pregonar y hacer la guerra, que buscar y encontrar la Paz.

Es ella, por cierto, la posición mayoritaria del país, calificada de ingenua, que para nada descalifican las breves encuestas tomadas en muy pocas ciudades en estos momentos de viva exaltación. La gente no quiere la guerra. Es más, y hay que decirlo aun corriendo el riesgo de que se malinterprete de mala fe, como

frecuentemente ocurre: si bien es verdad que la seguridad es una necesidad prioritaria y que alcanzar la tranquilidad es para el Estado, hoy por hoy, su objetivo fundamental, hay sectores de la comunidad, amplios sectores, numerosísimos sectores de la población, a los que poco o nada interesa o intranquiliza la situación de inseguridad que se viene padeciendo. Son los colombianos que soportan el ostracismo social, las víctimas de las diferencias económicas que persisten en el país, los derrotados de la sociedad que lo son sin haber tenido la oportunidad de luchar por su reivindicación, a quienes por sustracción de materia no afecta, por ejemplo, el boleteo ni el secuestro. Su principal preocupación es conseguir hoy lo que les permita comer mañana.

Pero hay más preocupaciones. La del Gobierno ha de ser, sin duda, la de mantener la legitimidad, lo que le procurará un respaldo ciudadano sostenido que es necesario para impulsar su estrategia de lograr tranquilidad y seguridad para los ciudadanos partiendo de la confrontación militar.

### ***Autoridad y justicia***

Las autoridades en combate, las que investigan, las que vigilan, las que juzgan, las que gobiernan en todas las instancias, tienen el deber de desoír las invitaciones al atropello y a la ilegalidad. No es posible violar la ley, so pretexto de mantenerla. No se justifica la existencia de un sistema que para sostenerse necesite de la persecución al ciudadano inocente. No pueden volver las épocas de la represión indiscriminada ni será dable, ni conveniente, ni legal, dar a todos los ciudadanos un tratamiento de guerrilleros. Lo peor que le podría ocurrir al país, y al Gobierno, y a la democracia, sería, ahora cuando la guerrilla ha sido descalificada por los propios ciudadanos y se encuentra desprestigiada y ha perdido importantes espacios políticos, revalorarla en su accionar y legitimarla como consecuencia de la arbitrariedad.

La Constitución Nacional sigue siendo el patrimonio más importante de nuestros sistemas políticos. No es verdad que sus normas estimulen la delincuencia, amparen la subversión y generen impunidad. Al contrario. Lo cierto es que fueron concebidas para construir el entendimiento. Más aún, su vigencia tiene el valor de eliminar cualquier pretexto de rebeldía con cargo a la falta de espacios para la confrontación ideológica legal. Se impone mantenerla en su incuestionable filosofía democrática y social. No se logra la normalidad reviviendo la llamada detención administrativa por orden del Ejecutivo, contra la que se pronunció paladinamente la Constituyente luego de una lucha de 30 años; no es instaurando nuevamente los

Consejos de Guerra para los civiles como se supera la impunidad; tampoco afectando el derecho de defensa ni limitando inconvenientemente el derecho a la información; las pesquisas no pueden estar sometidas solamente a la soberana voluntad del funcionario, ni las tareas de inteligencia deben ser aprovechadas para obrar por fuera de la norma ni de los expedientes.

De toda gestión oficial hay que dar cuenta y resultado y cada actividad puede estar sometida eventualmente a examen e investigación. En épocas de anormalidad jurídica y política, es cuando deben estar con los ojos más abiertos los encargados de defender y hacer respetar los derechos ciudadanos.

Ni más faltaba que se pretendiera utilizar como pretexto para obrar sin tasa ni medida el mal llamado «síndrome de la Procuraduría». Las autoridades militares y policiales, ciertamente sacrificadas, en muchas ocasiones injustamente denunciadas y cuestionadas, adquirirán en el país la importancia y el respeto que merecen sobre la base de obrar transparentemente, lo que en nada impide que actúen severa y diligentemente. La mano fuerte que algunos llaman para insistir en la represión ciega y desmedida, es afrenta tanto para el ciudadano como para la propia autoridad. La fuerza de esa autoridad se funda en la justicia, la ecuanimidad y la razón.

La lucha contra la subversión no entraría, entonces, abandonar lo que se ha logrado avanzar en civilización y en democracia. Con la explicación de que la guerrilla es insensata, es criminal, es enemiga de la solución política del conflicto, no es dable arriar las banderas de la justicia social. Por eso hoy más que nunca resulta preciso llamar a filas a los «idiotas útiles» de Colombia, que denuncian la arbitrariedad, que están contra la injusticia, que piden temperancia y buen juicio a los gobernantes, que abominan la discriminación, que reclaman participar, que están contra la corrupción, que piden definiciones políticas a los políticos y resultados sociales a los gobernantes. Que actúen los «idiotas útiles» que están contra la providencia que negó la tutela para sentencias, los que se oponen a la pena de muerte, los que no quieren más impunidad, los que exigen garantías para el ejercicio de la actividad política, en fin, los que reclaman que haya un Estatuto de la Oposición que permita romper el socorrido argumento del unanimismo para que la confrontación política en igualdad de condiciones, con seguridad para todos, sea la más apropiada forma de alcanzar la paz.

### **Tiros y calaveras**

Si se cerraron los caminos del diálogo para la paz, que se mantengan abiertos los espacios para la civilidad y el entendimiento. No parece dable que la guerrilla odiosamente desenfrenada pueda mantener su comportamiento de pugnacidad contra todo y contra todos, ni continuar haciendo una lectura tan irreal de las verdades nacionales. Por lo menos no toda la guerrilla. Por eso la situación está para el raciocinio y no para los desmanes. Como lo dijera hace algunos meses Ernesto Samper, «debemos avalar el uso intensivo de la fuerza para apoyar la capacidad persuasiva de la argumentación. Fuerza legítima y argumentación digna».

En este sentido, trabajar de manera paralela a la confrontación una pedagogía de la paz, tiene plena validez. El desarrollo social, acabar la impunidad, abrir mayores posibilidades de participación, llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad, es rescatar la confianza en el Estado Social de Derecho y dejar sentado claramente que la lucha subversiva ha perdido su razón de ser.

Desarrollar plenamente la Constitución; prepararlos espacios democráticos para que tengan cabida los partidos de oposición; descalificar la autodefensa y la llamada justicia privada; ser tolerantes con el que tiene ideas contrarias y dar posibilidades para que la democracia amplia y generosa llegue a todos los lugares de la Patria, no es candidez sino contribuir a la lucha por la paz, que no puede adelantarse solamente sobre la deleznable contundencia de los fusiles.

Ningún artículo, ninguna reflexión, ningún discurso ni argumento, me ha impresionado más frente a la situación de violencia que padece el país, que la caricatura de Kekar publicada recientemente en un importante periódico nacional: en un basurero, una calavera le dice a la otra: «¿Sabe que aún no han aprobado la pena de muerte?» Y ésta le responde: «Qué bueno. Entonces los 20 tiros que me dieron fueron inconstitucionales».

No se necesita preguntar si las calaveras representan los sectores en contienda. La situación demanda una explicable exclamación: «¡Por la convivencia, idiotas útiles de Colombia, uníos!».